

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 9º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-31667-2019
CARATULADO : MARTÍNEZ/ESTADO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En presentación de 23 de octubre de 2019 comparece doña Julia Georgina Urquieta Olivares, abogada, en nombre y representación de don Sergio Antonio Muñoz Cáceres, jubilado; don Luis Cifuentes Seves, jubilado; don Héctor Leonardo Peña Soto, jubilado; don Carlos Alberto Vega Pizarro, jubilado; don Gregorio Guillermo Suarez Bustos, técnico en gestión de organizaciones; don Emilio Humberto Daroch Fernández, jubilado; doña María Geraldina Lisham Guerrero, pensionada; don Carlos Oliverio Galaz Muñoz, jubilado; don Eduardo Selin Nallar Abud, pensionado; don Mario Raúl Navarro Cortes, pensionado; doña Fedora Clotilde Demsky Verdugo, profesora; doña Erica Del Transito Osorio Araya, jubilada; don Sergio Carlos Moscoso Bustamante, ingeniero; don Aldo Alberto Leal Labrin, ingeniero textil; doña Marcela Liliana Lizana Fuentes, educadora; don Rimski Iván Ricardo Reyes Ramírez, ingeniero; don Álvaro Orlando Palacios Gonzalez, economista; don Eduardo Jorge Tourrel Navarrete, jubilado; doña Iris Natalia Aceitón Venegas, jubilada; don Juan Bautista Martinez Amigorena, contratista, todos domiciliados en pasaje Doctor Sótero del Río N°326, oficina 707, comuna de Santiago, demandando de indemnización de perjuicios por daño moral al Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1.687, edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago,

Indica que los aciagos hechos descritos en este libelo han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Valech 1 y la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech.

Si bien existe una clara vinculación de los hechos, por el lugar en que se cometieron y, en algunos casos, por los hechores, además de una similitud en el tiempo, relatará de manera individual, pero resumida, la situación de cada uno de los demandantes y que constituye el fundamento fáctico de esta demanda:

1.- Don Sergio Antonio Muñoz Cáceres, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°16053.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM

El 11 de septiembre de 1973, se encontraba con sus compañeros en la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago, de la cual era estudiante, y no pudieron salir por haberse decretado toque de queda, cuando como a las 6 de la madrugada fueron atacados por las fuerzas militares, él estaba en el salón de honor, los sacaron a golpes y los obligaron a ponerse en el suelo boca abajo, estuvieron muchas horas en esa posición, siendo golpeados permanentemente.

El 12 de septiembre de 1973, los llevaron en un autobús al Estadio Chile en donde los recibieron con una golpiza enorme, fueron llevados al interior del Estadio tirándolos a las tribunas en donde sufrieron muchos golpes y también vieron la muerte de varias personas.

El 15 de septiembre de 1973, fueron trasladados en microbús al recinto de detención Estadio Nacional, donde nuevamente los insultaron y golpearon por Carabineros, luego los llevaron a la escotilla 7 en donde recibieron todas las humillaciones y torturas mental y física.

El 20 de septiembre lo llevaron al velódromo en donde un militar lo interrogó con la vista vendada, torturándolo con amenazas y golpes.

Salió en libertad condicional el día 6 de octubre de 1973, siendo expulsado de la Universidad y las secuelas se le manifiestan hasta el día de hoy.

El 14 de mayo de 1984, fue detenido nuevamente en forma violenta por varios agentes de la CNI sin identificarse, estando en su negocio de combustibles, fue ingresado en un auto sin patente, vendado y llevado hasta Viña del Mar (cuartel Agua Santa). Cuando llegaron al lugar le hicieron sacarse la ropa siendo golpeado por alrededor de ocho individuos, con la vista vendada, dejándolo inconsciente, luego despertó sentado en una silla engrillado y con la vista vendada, perdió la noción del tiempo y empezó el interrogatorio pasando por la parrilla (le pusieron corriente y golpes en los oídos y en el pecho) preguntándole por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y por su militancia. Durante su estadía allí lo llevaron a una tina en donde lo sumergieron perdiendo el conocimiento. Durante toda su permanencia fue amenazado que matarían a sus hijos y cónyuge.

En octubre fue trasladado a la cárcel de alta seguridad en la cual permaneció hasta marzo de 1985, día en que recobró su libertad con firma semanal en Santiago, hasta marzo de 1990. Mantiene hasta hoy, secuelas físicas como marcas en sus brazos y una otitis crónica.

2.- Don Luis Cifuentes Seves, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°5865.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en la misma Casa de Estudios, donde era académico. El día anterior fuerzas militares habían rodeado el antiguo edificio de la que había sido la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad, (avenida Ecuador N°3.659), por lo que nadie pudo salir, y habían disparado toda la noche contra el recinto. Finalmente, entraron en la mañana del día 12, derribando puertas, disparando contra los edificios y golpeando a estudiantes, profesores y funcionarios. A un grupo de varios cientos los forzaron a tenderse boca abajo en los patios de la escuela, que se encontraban regados de la sangre de los heridos. Después de varias horas de amenazarlo de muerte, lo llevaron a golpes a un grupo de vehículos que lo trasladó al Estadio Chile, que se encontraba a pocas cuadras de distancia. En ese lugar le tocó presenciar asesinatos, torturas, discursos amenazantes.

A los profesores universitarios presentes en el Estadio se los separó y se los envió al foyer del edificio, desde donde podían ver cómo se obligaba a “huir” (en verdad, a correr bajo amenaza de muerte) a numerosos jóvenes, entre ellos muchos extranjeros, para luego balearlos en la calle que hoy lleva el nombre de Arturo Godoy, la que estaba completamente cubierta de sangre.

Al cabo de cuatro días lo trasladaron al Estadio Nacional, donde se lo ubicó en los camarines y escotillas. Tenían que dormir en el suelo apretados unos con otros debido al gran número de presos.

De allí lo sacaban para ser interrogado (torturado) en el viejo velódromo. Se lo hacía esperar varias horas escuchando los alaridos de la tortura, que se practicaba en los llamados “caracoles” (baños) y otras dependencias. Por otra parte, durante las noches se escuchaban descargas de fusilería que, con cierta seguridad, eran fusilamientos. En una oportunidad, de regreso del velódromo, los obligaron a pasar caminando sobre una ruma de cadáveres. Tuvo que pasar varios días esperando ser interrogado en el lugar, con lo que sufrió la experiencia de presenciar muchas sesiones de tortura. Cuando le llegó el turno, lo torturaron con descargas eléctricas reiteradas.

Se lo clasificó como “sospechoso peligroso” y al cabo de dos meses de permanencia en el Estadio Nacional, se lo envió al campo de concentración de Chacabuco, donde el trato fue diferente, ya que los que llegaban allá ya habían sido interrogados y esperaban una resolución de los tribunales militares, que podía significar la libertad, un nuevo período de interrogatorios y torturas en diversos lugares, el traslado a cumplir condena en algún recinto penal, o el exilio.

Al llegar al campo, se golpeó a varios presos políticos y se los obligó a desnudarse en la fría madrugada del desierto. En otras oportunidades se los



dejaba de plantón en el pesado sol del norte grande y ocasionalmente, se los sometió a trabajos forzados. Pudo constatar que detenidos a quienes los llevaron fuera del campo (a Antofagasta) fueron torturados.

En febrero de 1974, al cabo de cinco meses de prisión, fue puesto en libertad, enterándose que había sido exonerado de su trabajo en la UTE.

Pocos meses después fue detenido por segunda vez y aunque fue puesto en libertad el mismo día, sus captores le dejaron claro que lo vigilaban.

Después de darse cuenta que con sus antecedentes era imposible que encontrar trabajo en Chile, viajó como exiliado, primero a México y luego a Inglaterra permaneciendo en ese país hasta 1992.

3.- Don Héctor Leonardo Peña Soto, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°6632.

Detenido el 12 de septiembre de 1973 en la misma Casa de Estudios, para posteriormente ser trasladado durante ese día al Estadio Chile, lugar en el cual permaneció hasta el 19 de septiembre de ese año, donde sufrió tortura psicológica y simulacros de fusilamiento.

Luego fue llevado al Estadio Nacional donde estuvo alrededor de 35 días, soportando toda clase de torturas, amenazas, insultos, amedrentamiento, interrogatorios con golpes, por parte de fuerzas militares.

Fue dejado en libertad el 4 de noviembre de 1973.

Al momento de la detención era estudiante de la Facultad de Ingeniería de Ejecución de Universidad Técnica, de la cual fue expulsado por Decreto Supremo del Ministerio de Educación N°300.

Entre el 12 al 18 de julio de 1974 fue detenido nuevamente, por la Policía de Investigaciones, permaneciendo en el Cuartel de Investigaciones ubicado en General Mackenna, donde sufrió encierro e incomunicación.

4.- Don Carlos Alberto Vega Pizarro, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°25761.

Profesor normalista y estudiante de Publicidad y Pedagogía en Medios Audiovisuales de la mencionada Casa de Estudios.

El 11 de septiembre de 1973, llegó a la Casa Central de la Universidad alrededor de las 8:30 de la mañana, permaneciendo en el lugar junto a todos los miembros de la comunidad que allí estaban. Durante toda la noche se sintieron la intensidad de los disparos contra el edificio hasta la madrugada, que es cuando entran los militares derribando las puertas por calle Ecuador y ocupando todo el recinto de la Escuela de Artes y Oficios. Los hicieron prisioneros a punta de culatazos, golpes, patadas y amenazas de muerte.



Más tarde, en buses los trasladaron al Estadio Chile, donde fueron recibidos a punta de golpes y garabatos.

Pasado algunos días los trasladaron al Estadio Nacional quedando en un sector de pasillos cercano a unos camarines, donde había cientos de prisioneros acostados en el suelo, otros en los baños, pero el lugar se hacía pequeño para tanta gente.

Producto de su paso por los dos centros de tortura mencionados, arrastra un daño psicológico y traumático tremendo, que con los años se le fue agudizando en lo físico, los golpes y sus consecuencias en los huesos. El daño emocional y moral que terminó con sus proyectos como persona, como profesional y como ente social.

5.- Don Gregorio Guillermo Suarez Bustos, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°23866.

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 al interior de la Sala del Consejo Superior de la referida Casa de Estudios, entre gritos, amenazas, órdenes, agresiones, golpes a todos, incluido el ex Rector Enrique Kirberg, quien se encontraba con toda la comunidad. Fueron bajados a golpes y ordenados en el piso con las manos en la nuca y un pie sobre otro, permaneciendo varias horas en esa posición, en la que fueron golpeados permanentemente por los militares, con gran nivel de violencia hacia los detenidos, desde correr por encima de los cuerpos que se encontraban en el suelo, patadas en las costillas, cabeza, indiscriminadamente fuese hombre o mujer. Luego de varias horas llegaron buses y los pusieron hincados hacia los asientos, para que no fueran vistos desde el exterior. Los llevaron al Estadio Chile, que fue lo peor que tuvieron que soportar.

6.- Don Emilio Humberto Daroch Fernández, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°6896.

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en la misma Casa de Estudios por fuerzas militares, junto a muchos estudiantes, funcionarios y académicos, y trasladado al Estadio Chile, donde permaneció hasta el 15 de septiembre, para luego ser trasladado al Estadio Nacional, donde fue interrogado el 30 de septiembre de 1973, en el velódromo y sometido a torturas físicas y psicológicas, calificado para un segundo interrogatorio, lo cual no se concretó. Fue dejado en libertad el 2 de noviembre de 1973.

Al 11 de septiembre, era estudiante de la Facultad de Economía y Administración y segundo vicepresidente de la Federación de Estudiantes. Fue expulsado en octubre del mismo año, sin poder recibir documentación para poder postular a otra universidad y continuar con sus estudios.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM

7.- Doña María Geraldina Lisham Guerrero, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°558.

Fue detenida el 12 de septiembre de 1973 al interior de la referida universidad, en compañía de cientos de estudiantes, docentes, y funcionarios.

El golpe de Estado significó un quiebre profundo en su vida, pues se preparaba para ingeniera químico y ese objetivo se truncó. Intentó estudiar otra cosa, pero no pudo. Hizo un curso de computación que aprobó con éxito, pero no consiguió trabajo, pues su currículum decía que le habían cancelado la matrícula en la UTE.

Junto a su cónyuge se fueron al exilio dado que él tampoco podía conseguir trabajo por las mismas razones. Antes de estas circunstancias, no pensó nunca en irse de Chile, alejarse de su familia, adaptarse a otras costumbres en otras tierras. En el extranjero trabajó y estudió, pero siempre con ese anhelo de regresar, lo que hizo en 1990.

8.- Don Carlos Oliverio Galaz Muñoz, con registro en Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech 2 N°3290.

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en la Escuela de Artes y Oficios de la mencionada universidad, junto a todos sus compañeros de Ingeniería y trasladado al Estadio Chile por las fuerzas militares, pateados y llevados a punta de fusil. En este centro fue interrogado y dejado posteriormente en libertad.

A la fecha de su detención, era miembro del Consejo Superior de la Universidad y ex Presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería y Ejecución. Era estudiante de Electricidad.

9.- Don Eduardo Selin Nallar Abud, con registro en Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech 2 N°5.894.

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en la señalada Casa de Estudios, donde era alumno de la Facultad de Ingeniería de Ejecución, sometido a golpizas y enfrentado a un simulacro de fusilamiento, luego de estar casi todo el día en la cancha de baby fútbol. Los detenidos fueron trasladados al Estadio Chile, donde le tocó presenciar golpes, fusilamientos, suicidios, y amenazas permanentes de ametrallamiento. Luego de algunos días, fueron llevados al Estadio Nacional, donde continuaron las torturas psicológicas, existían encapuchados que seleccionaban al azar a los detenidos, que eran sacados de las escotillas con destino incierto.

10.- Don Mario Raúl Navarro Cortes, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°16609.



Fue detenido el 28 de septiembre de 1973, en la misma universidad, donde se desempeñaba como académico y director del Departamento de Comunicaciones de la Secretaría Nacional (Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones UTE).

Fue detenido por civiles mientras cobraba su sueldo y entregado a una patrulla militar apostada en la entrada de la Casa Central de la Universidad, para luego ser conducido a golpes de culatazos a las oficinas de rectoría y entregado a oficiales del Ejército que ocupaban la oficina del rector Enrique Kirberg; a gritos, insultos, garabatos y golpes con sus armamentos, lo botaron al suelo y le ataron fuertemente las manos a la espalda y a la vez pasaron cordel y restos de alambre por su cuello, impidiéndole cualquier tipo de movimiento. Luego lo arrastraron al pasillo, siempre boca abajo contra el piso, sobre vidrio molido resultante del ataque militar que sufrió la universidad al amanecer del 12 de septiembre de 1973. Lo dejaron al final de una fila de prisioneros, integrada por académicos y funcionarios universitarios, todos boca abajo en el suelo, con amarras en manos y cuello. Esta escena de apremios y vejámenes fue observada por funcionarios universitarios desde el frontis de la Casa Central UTE, dada su arquitectura totalmente vidriada. Fueron golpeados, insultados y agredidos por la tropa que los vigilaba, los vejámenes y golpes con cañones y culatas de sus fusiles se incrementaban con las órdenes dadas por un civil que continuamente pasaba por el pasillo donde los mantenían amarrados. Fue torturado durante todo el día de su detención, en su propia Universidad, a la que había ingresado como estudiante en 1963.

Al atardecer del 28 de septiembre de 1973, fue trasladado con fuerte vigilancia militar al Estadio Nacional en un camión particular, al cual fue lanzado por sobre las barandas, estando todavía con las manos amarradas a la espalda. Fue interrogado en el velódromo, vivió lo ampliamente conocido respecto del sufrimiento padecido por los prisioneros en ese campo de reclusión y tortura; padecimientos físicos y psicológicos, recibió tratos crueles y degradantes.

En noviembre de 1973, fue trasladado a la Penitenciaría de Santiago, siempre incomunicado, sin saber hasta ese momento nada de su cónyuge e hijos.

A principios de diciembre de 1973, en la Penitenciaría, fue interrogado por un fiscal de carabineros, se lo acusaba falsamente de: “Enfrentamiento a las fuerzas armadas, el día 11 de septiembre, en la Universidad Técnica del Estado”.

A mediados de diciembre de 1973, quedó en libre plática y pudo ver y saber de sus pequeños hijos y cónyuge.



A fines de febrero de 1974, el fiscal a cargo de su causa le comunicó que el militar Jefe de Plaza, y el interventor militar, que oficiaba de rector delegado en la Universidad Técnica del Estado, afirmaron en comunicados públicos, cada uno por separado, “que el día 11 de septiembre de 1973 no se registraron enfrentamientos armados en la Universidad Técnica del Estado”. Dada esta declaración oficial, la falsa acusación que lo afectaba, quedó sin sustento. La fiscalía le otorgó la libertad condicional, con firma semanal que debía realizar en el subterráneo del Ministerio de Defensa.

11.- Doña Fedora Clotilde Demsky Verdugo, con registro en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech 2 N°2482.

Detenida en la señalada universidad el 12 de septiembre del año 1973 y trasladada al Estadio Chile, donde fue sometida a torturas, golpes y diversos vejámenes por parte de militares, con brazalete color naranja de las fuerzas armadas, quienes ingresaron violentamente a la Universidad, realizando una balacera brutal, fue sacada del Laboratorio de Química donde se encontraba a punta de culatazos y arrastrada del pelo, propinándole patadas y golpes, la hicieron ponerse de pie, con manos en la nuca y tirada al suelo boca abajo en el patio de la Escuela de Artes y Oficios, junto a cientos de alumnos y alumnas. Prosiguieron los insultos y agresiones, al frente de la cruenta operación y ocupación que dirigía el Sargento Flores, fue despojada de su anillo, reloj y cadena del cuello, de allí trasladada a una sala de clases, puesta boca abajo nuevamente, donde continuaron con las agresiones físicas y psicológicas con amenazas de muerte y fusilamiento inmediato en caso de no decir el lugar dónde estaban escondidas las armas. Posteriormente la llevaron caminando siempre con manos en la nuca, a los buses que la condujeron al frontis del Ministerio de Defensa Nacional, después fue trasladada al Estadio Chile, donde se repitió el horror, apremios ilegítimos, golpes y tortura. Alrededor de las 19:30 horas aproximadamente la liberaron, dejándola en calle Blanco Encalada frente al Regimiento Tacna, con toque de queda, no supo cuántas patrullas la detuvieron por toque de queda pidiéndole identificación, teniendo que informar que venía del Estadio Chile, camino a su casa en la comuna de Conchalí cerca de calle Zapadores. Sufrió un quiebre familiar con sus padres, después de su salida de ese recinto.

En distintas oportunidades fue sometida a seguimientos y amenazas, no tuvo acceso al trabajo por limitantes de diversa índole, con tratamiento psicológico y expulsada de la Universidad, por su calidad de dirigente estudiantil.



12.- Doña Erica Del Transito Osorio Araya, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°17667.

Detenida en la misma universidad el 12 de septiembre de 1973, con más o menos 800 personas, luego de pasar una noche entre dos fuegos, sin poder moverse. Junto a ocho compañeros fueron sacados a punta de culatazos del subterráneo del gimnasio en donde permanecieron entre el fuego por un lado, de militares desde la Villa Portales y por el otro de carabineros desde la calle Ecuador, hasta la multicancha, donde permanecieron por horas boca abajo, siendo víctima de simulacro de fusilamiento y gracias a un alumno un soldado no lanzó una granada al lugar donde se encontraban.

De allí fue trasladada al Estadio Chile donde permaneció hasta el 16 de septiembre de 1973, viviendo las atrocidades que allí sucedieron y soportando interrogatorios y vejámenes de los militares.

Al 11 de septiembre era estudiante y presidenta del Centro de Alumnos de Construcción Civil, de la Universidad Técnica del Estado.

13.- Don Sergio Carlos Moscoso Bustamante, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°15913.

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973, alrededor de las ocho de la mañana en la Casa Central de la misma universidad por tropas del Ejército, de la que tuvieron que salir junto a otros alumnos y alumnas, cuando ese edificio fue atacado con un cañonazo por las tropas militares. Los hicieron salir a punta de patadas y tenderse a todos boca abajo en la calle frente a la Universidad, dejando separadas a un lado a las mujeres. Posteriormente, se juntaron todos en la cancha de hockey de la Escuela de Artes y Oficios y alrededor de las 17 y 18 horas los empezaron a sacar de allí para subirlos a unos buses en los cuales los trasladaron hasta el Estadio Chile, donde los recibieron con un callejón de patadas y culatazos y los hicieron mantenerse siempre trotando, hasta llegar a un puesto donde les pedían identificarse y les requisaban el carnet, separando a los profesores y funcionarios para enviarlos aparentemente al subterráneo y a los estudiantes los enviaron a las graderías, donde permanecieron por varios días sin ningún alimento y amenazados frecuentemente por centinelas armados, aparentemente conscriptos casi tan atemorizados como los detenidos.

Fue trasladado al Estadio Nacional, donde lo recibieron con patadas y culatazos por parte de Carabineros y los encerraron. Aquí repartían comida una vez al día y pasaban mucha hambre. Ante un posible interrogatorio, se fue a los camarines vecinos con la tribuna oficial, donde había un hacinamiento increíble y apenas cabían, por lo que hacían milagros para acomodarse para dormir y donde



había gente que había sido muy maltratada. Se sintió muy enfermo y un prisionero que era médico lo atendió, pero no tenían medicamentos. Después de varios días lo interrogó un oficial de la Armada, y le preguntó que hacía en la UTE y cómo lo habían detenido, igual lo amenazó y presionó para que diera nombres y datos que él no conocía. Al final resultó que volvió a los camarines, con alguna esperanza de ser liberado prontamente, pero eso nunca se sabía con certeza.

En un par de días lo llamaron para que se ubicara en el sector de los que iban a ser liberados, lo que ocurrió un viernes o sábado al atardecer, alrededor del 8 de octubre de 1973. Lo dejaron en la calle Vicuña Mackenna.

Los días y meses siguientes fueron de zozobra, ya que apenas sentía un ruido en la noche se sobresaltaba en forma extrema, pero estaba con su familia, esperando que iba a pasar cuando se reiniciaran, si es que alguna vez se reiniciaban, las clases en la UTE. Cuando finalmente, las clases se reanudaron, se encontró con nuevas autoridades en la Universidad, las que habían cancelado su matrícula, ya no era estudiante debido a su militancia. Apeló de esta decisión y como era un muy buen estudiante y los profesores lo respetaban aun cuando no pensaba como ellos, después de algunas semanas de presentaciones y trámites, logró que lo reincorporaran. Terminó el semestre con muy buenas notas, pero también con una notificación de que de nuevo estaba expulsado, sin expresión de causa, por una instrucción del organismo de inteligencia al interior de la UTE. De nuevo apeló de esta decisión y como las autoridades académicas, no habían sido consultadas, a pesar de su temor, volvieron a reincorporarlo y pudo finalmente terminar su carrera, aún con toda la presión que esta persecución le significaba.

Todos los trabajos con los cuales generaba ingresos para pagar sus estudios bruscamente fueron eliminados por el régimen, por lo que su situación económica no era nada buena.

En la prosecución de sus estudios siempre estaban vigilados, al comienzo directamente con presencia militar armada en los pasillos, mientras se dictaban las clases, existía una posición con ametralladora montada sobre el techo de las oficinas de la Facultad. Posteriormente, la guardia armada se retiró y la vigilancia pasó a ser más oculta.

Pese a todo este entorno, pudo terminar sus estudios, completar su trabajo de titulación y graduarse como Ingeniero Civil Electricista, sin perjuicio, de que todos sus intentos por conseguir algún empleo terminaban con una devolución de los documentos, a pesar de sus muy buenos antecedentes académicos.



Más aún, cuando se graduó a mediados de 1976, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UTE, le pidió que diera unas horas de clase, lo que hizo considerando que no tenía otro trabajo, y en esta calidad de profesor presentó un trabajo en el Congreso de Ingeniería Eléctrica en enero de 1977 en la Universidad Técnica Federico Santa María, pero cuando volvió de dicho Congreso, de nuevo le dijeron que no lo iban a contratar porque el organismo de seguridad de la UTE había objetado su contratación. Vista la persecución, no le quedó otra alternativa que pensar en salir del país, lo que hizo viajando a Venezuela donde permaneció con su cónyuge desde 1977 hasta 1990.

14.- Don Aldo Alberto Leal Labrin, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°12806.

Detenido el 12 de septiembre de 1973, desde la Facultad de Ingeniería a la cual pertenecía como estudiante, sacado en forma violenta por las fuerzas militares que ocuparon la universidad.

Fue trasladado al Estadio Chile donde fue objeto de permanentes malos tratos y después de tres días al Estadio Nacional, donde permaneció hasta mediados de octubre del mismo año, donde sufrió torturas y vejámenes.

Al ser liberado fue informado a su domicilio de aquel entonces, a través de un decreto firmado por el rector militar, junto a un listado de estudiantes que había sido expulsado sin derecho alguno para postular a cualquier universidad del país.

15.- Doña Marcela Liliana Lizana Fuentes, con registro en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech 2 N°4704.

Fue detenida alrededor de las siete de la mañana en la Facultad de Artes y Oficios de la Universidad Técnica del Estado, el 12 de septiembre de 1973, por las Fuerzas Armadas y llevada en bus hasta el Ministerio de Defensa, ubicado en calle Zenteno con avenida Libertador Bernardo O'Higgins, al momento del ingreso al Ministerio, fueron regresadas en el mismo bus por calle Alameda hasta el Estadio Chile.

Estuvo prisionera en el Estadio Chile, hasta el 12 de septiembre alrededor de las 19.30 horas aproximadamente, la dejaron en calle Blanco Encalada frente al regimiento Tacna. De ahí y durante el toque de queda, caminó hasta su hogar ubicado en San Ignacio con avenida Matta.

Al retorno a clases de la Universidad, fue sacada de la sala de clases por las Fuerzas Armadas y llevada a un recinto dentro de la Universidad para ser sometida a interrogatorio, notificada de ser sumariada por la casa de estudios, por daños y pérdidas de elementos según se dijo, fue objeto de la misma situación,



detenida y llevada a interrogatorio por tres o cuatro oportunidades. La gente que estaba en el interrogatorio portaba consigo armas y brazaletes color anaranjado en su brazo y un cuello del mismo color. Al cierre de este interrogatorio se le comunica la prohibición de entrar a la casa de estudios.

Dado el quiebre de su proyecto de formación profesional y haber sido sujeto de tales demandas al dejar de estudiar, sufrió la desarticulación familiar y solo tiene acceso a trabajos esporádicos de sobrevivencia.

16.-Don Rimski Iván Ricardo Reyes Ramírez, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°20358.

Fue detenido alrededor de las seis de la mañana del 12 de septiembre de 1973 en la casa central de la Universidad Técnica del Estado, por fuerzas del Ejército que correspondían al Regimiento Arica de La Serena. Luego de un tiempo les ordenaron levantarse y dirigirse a la cancha de hockey de la Escuela de Artes y Oficios completaban la cancha, por las dimensiones de la cancha eran unos 1500 hombres ya que a las alumnas las habían sacado antes para llevarlas al Estadio Chile. Luego de un tiempo, fue llevado en buses, junto a otros detenidos, al Estadio Chile, lugar que estaba llenándose de trabajadores de industrias y estudiantes, funcionarios y académicos de la UTE, incluido el rector Don Enrique Kirberg. Allí permaneció durante cuatro días, sin alimentación, salvo una taza de porotos y medio pan que recibieron al segundo día.

Fue trasladado al Estadio Nacional el sábado 15 de septiembre, siendo beneficiado por la Universidad con beca alimenticia y residencia, automáticamente al asalto represivo se lo despojo de tales asignaciones y por lo tanto el día de su libertad, alrededor del 15 de octubre de 1973, no tenía lugar, ni medios donde llegar, siendo acogido en el hogar de una compañera de estudios, por un tiempo.

Cuando la Universidad se abre para continuar los estudios, también aparecen las listas de borrados, es así como su nombre está en el primer decreto de expulsión con prohibición de ingresar a cualquier universidad chilena. Además, le comunican unos compañeros, que han allanado los pensionados preguntando por él, debió alejarse de la universidad.

Su salud en general fue buena, hasta los 36 años que le aparece, producto del estrés crónico, convulsiones del tipo epiléptico las que fueron incrementándose, después de 5 años logró estabilizarse.

17.- Don Álvaro Orlando Palacios Gonzalez, con registro en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech 2 N°6438.



Detenido en la misma universidad el 12 de septiembre de 1973, donde era estudiante del Instituto Pedagógico. Fue trasladado en forma violenta al Estadio Chile, donde sufrió graves violaciones a sus derechos humanos. Posteriormente lo llevaron al Estadio Nacional, donde fue interrogado y golpeado por personal militar y civil en el velódromo. Testigos de su detención son todos los estudiantes de la UTE detenidos el mismo día.

Figura además, en el listado oficial de presos que tenía el centro u oficina de detenidos de la dictadura, documentación que conocía la Comisión Valech, donde confirmaron su detención.

18.- Don Eduardo Jorge Tourrel Navarrete, con registro en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech 2 N°8803.

El 12 de septiembre de 1973, fue detenido en la universidad mencionada junto a centenares de alumnos, académicos y funcionarios. Era estudiante del Instituto Tecnológico, carrera universitaria de la UTE.

Lo llevaron prisionero al Estadio Chile, donde fue tratado violentamente viendo cosas atroces. Posteriormente lo trasladaron al Estadio Nacional, donde es torturado con golpes, simulacros de fusilamiento y tortura psicológica. Estuvo prisionero durante un mes y un día. Fue perseguido implacablemente, lo que le impidió reanudar sus estudios universitarios, y una normal vida laboral y familiar.

Todo lo vivido le significó sufrir psicológicamente durante varios años, hasta retomar una vida medianamente normal.

19.- Doña Iris Natalia Aceitón Venegas, con registro en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Valech 2 N°42.

Fue detenida el 12 de septiembre de 1973 en la misma universidad junto a centenares de estudiantes, académicos y funcionarios. Desde una logia de la Escuela de Artes y Oficios, fue sacada, golpeada por los militares con sus armas, pateada, mechoneada e insultada con los más duros epítetos, hasta tirarla como un despojo a un patio de la Escuela. Allí boca abajo y con las manos en la nuca, junto a decenas de mujeres, con el horror del silbido de las balas, el olor a pólvora, las burlas y groserías de sus cancerberos y con el espanto de su destino incierto, comprobó que la pesadilla recién comenzaba. Trotando, con las manos en la nuca los ponen de espalda a una muralla, dan orden de disparar. Sintió que la mataban, era un simulacro de fusilamiento, estos se suceden una y mil veces. Luego, todas las mujeres son subidas en una micro y las pasean por el centro de Santiago. Se respira el olor y el color de las balas. Gritos. Frente al Ministerio de Defensa las dejan como escudos humanos. Hay fuego cruzado, los militares se



protegen fuera de la micro, las balas silban sobre sus cabezas, los vidrios se hacen añicos. Después al Estadio Chile.

Fue expulsada del Instituto Pedagógico, donde cursaba su tercer año de castellano, nunca fue readmitida, sería encarcelada nuevamente si se encontraba a varias cuadras a la redonda de su Universidad.

Durante toda la dictadura no pudo trabajar en ninguna entidad pública. Le troncharon su carrera profesional.

20.- Don Juan Bautista Martínez Amigorena, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N°14206.

Estudiante de la carrera de Ingeniería de Ejecución Eléctrica, dirigente del partido socialista, vicepresidente del centro de alumnos de ingeniería de ejecución de la Universidad Técnica del Estado, el 12 de setiembre de 1973 fue detenido, tras un gran operativo de militares, con Carabineros, los cuales destrozaron con cañones y metralla la casa central de la mencionada universidad. Por alto parlantes se les exigió salir trotando y brazos en alto a la calle, allí fueron golpeados y puestos boca abajo, a la espera de ser trasladados al Estadio Chile permaneciendo allí hasta el quince de ese mes. Luego lo trasladaron al Estadio Nacional en donde fue torturado y tirado frente a la escotilla 8, allí lo rescatan los estudiantes de la UTE, y un médico que informa sobre su estado a la Cruz Roja, quienes al ver su condición exigen que sea trasladado a un centro médico que resulta ser el Hospital Militar, permaneció allí hasta el 26 de octubre de 1973. Es así que fue reconocido como prisionero político por la Cruz Roja Internacional y por las Naciones Unidas.

Queda claro que como consecuencia directa de la prisión política y las torturas producidas a sus representados se produjo, inequívocamente, un perjuicio tanto síquico como físico, el que fue provocado por el Estado chileno durante todo el período del gobierno dictatorial. Estos además tienen el carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de 40 años desde lo sucedido, estas personas continúan con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos, además de en muchos casos verse obligados a abandonar el país, sin poder retornar, algunos incluso alejándose de sus familias.

Los daños son distintos de persona en persona, sin embargo, todos tienen en común el daño moral. Se trata de un daño obvio, público, notorio.

Cita al efecto fallo de la Corte Suprema Rol 5.946-2009, con la cual coincide, pues el daño moral se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, salta a la vista de lo evidente que es.



Por todo ello, es que en la representación que inviste, demanda al Fisco de Chile, por daño moral, para que como consecuencia directa de la prisión política y tortura de que fueron objeto sus representados, les pague la suma de \$200.000.000.- para cada uno de ellos y ellas, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales, desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más costos.

Sobre la responsabilidad del Estado, agrega que la doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que lo obliga a responder por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos.

Lo dicho por la doctrina se fundamenta en el principio de igualdad que plasmaba ya el artículo 10 N°1 de la Constitución de 1925, pues es inconstitucional que un sujeto de derecho sea lesionado y perjudicado sin ser indemnizado en relación con otros sujetos a los cuales no les afectan los actos u omisiones ilícitos del órgano estatal. La consagración del gobierno republicano y democrático se plasma de manera explícita en el artículo 1 de la Constitución de 1925 que cita.

Los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N°1 y 10N° 9.

En cuanto a lo preceptuado por el actual artículo 6 de la Constitución de 1980, existe meridiana claridad de que los órganos del Estado siempre deben sujetar su actuar a la preceptiva constitucional y a las leyes, pues si fuera otra la interpretación no se entendería el principio de supremacía constitucional.

Además da cuenta que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar, a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, según la doctrina unánime de los iuspublicistas, es imprescriptible.

La responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil.

La jurisprudencia de los tribunales superiores también ha recogido la inaplicabilidad de las normas civiles antes señaladas, y por ende, las reglas en materia de prescripción. Al efecto, cita el fallo 24.288-2016 de 5 de septiembre de 2016 de la Corte Suprema.



En suma, las normas en materia de prescripción civil no resultan aplicable a los procesos en que se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, pues existen las normas de derecho público que rigen este tipo de responsabilidad, como son los preceptos de la Constitución de 1925, ergo, la acción ejercida es imprescriptible.

Sobre la forma de operar de las disposiciones constitucionales, señala que aquellas que consagran la responsabilidad del Estado por los daños cometidos en cualquiera de sus actividades tienen una vinculación directa sin ser necesaria la dictación de una norma de inferior rango que disponga su aplicación; es decir, poseen operatividad propia y, desde el momento que asumen su carácter priman por sobre toda otra disposición.

Por esta razón y dada la inexcusabilidad de su función consagrada en la propia Constitución, el juez se encuentra sujeto a la imperatividad de resolver el caso sometido a su conocimiento, debiendo someterse a la norma fundamental vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, la cual establecía clara y precisamente la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus órganos.

La citada responsabilidad del Estado, fundada en una primera etapa sobre la legislación civil, evolucionó para fundarse en principios de derecho público. La doctrina cita como los primeros fallos en que se sustenta la responsabilidad en principios de derecho público “Sociedad Fuschs y Plath con Fisco”, de 11 de enero de 1908 y “Lapostol con Fisco”, de 8 de enero de 1930. Sin embargo, será en “Hexagon con Fisco”, de 28 de julio de 1987, en que expresamente se declaran inaplicables las disposiciones del Código Civil para decidir la demanda dirigida contra el Fisco, resolviendo el caso sobre la base de las normas constitucionales y legales diversas al Código Civil. Desestima la infracción del artículo 2332 del citado Código al no darle aplicación e igualmente las referidas a las Actas Constitucionales N° 2 y 3, la Constitución y Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, en que radica el origen de la responsabilidad del Fisco.

La circunstancia que desea destacar es que la jurisprudencia, sobre la base de la legislación especial, ha sustentado la responsabilidad de la Administración, la que arranca de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 38 de la Constitución Política de la República, 4 y 42 de la Ley N°18.575. La norma del inciso 2° del artículo 21 de la Ley N°18.575 no afecta la disposición del artículo 4, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración del Estado que expresa el inciso 2° del artículo 1 del mencionado legal, de forma tal que este régimen de



responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública.

En lo sustancial la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a un estado, pacífico en la actualidad, que reconoce la responsabilidad del Estado-Administrador, exigiendo, en la mayoría de los casos, un factor de imputación. En el caso el factor de imputación es la responsabilidad del órgano por la falta personal del agente.

La doctrina de la responsabilidad del Estado emanada del derecho público ha sido recogida íntegramente en el histórico fallo dictado en el caso del homicidio de los profesionales Guerrero, Nattino y Parada, el que se encuentra ejecutoriado y en el que cita.

Dicha jurisprudencia tiene su antecedente en la importante sentencia dictada por la Corte Suprema conociendo de un recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco en los autos con el ya citado caso "Hexagón Limitada con Fisco", el cual también refiere.

A mayor abundamiento y sin perjuicio de la obligación del Estado de indemnizar los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de 1925, las Actas Constitucionales y la Constitución de 1980, su responsabilidad extracontractual también emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que consagran la responsabilidad del Estado por falta de servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

Agrega que en el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados:

- Daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito este se presume.

- La acción u omisión emanó de un órgano del Estado, pues fueron agentes del Estado los que torturaron a sus mandantes, sin que haya demostrado la sujeción a procedimiento alguno.

El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal.

- Nexo causal. El daño a las víctimas emana de la perpetración del delito civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM

- No existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

Sobre los fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar, señala que conviene precisar que, de acuerdo a los hechos narrados y que afectaron a cada uno de sus mandantes, los agentes del Estado incurrieron en una falta personal, al privar de forma ilegítima de la libertad y someter a torturas a los y las demandantes.

El Estado, no puede desvincularse de la falta en que incurrieron sus agentes, ya que fue el mismo el que les asignó la función pública de reunir información estratégica para la seguridad nacional, la que ejercieron abusivamente cometiendo falta personal en su ejercicio, comprometiendo con ello la responsabilidad del Estado.

Atendido además que los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda, tienen además el carácter de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, u otra calificación concurrente con la de torturas, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran *iuscogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 cita.

De acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho Interno. Debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que dada su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

En el mismo sentido, el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie la de establecer responsabilidades-, incumplimiento del que derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el



derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

El Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Para que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva deben concurrir dos elementos. El primero de ellos es la violación de una obligación internacional, situación que en el caso presente se encuentra plenamente cumplida pues la privación ilegítima de libertad y las torturas graves y reiteradas, cometidos en contra de las y los demandantes, mirados desde la perspectiva del derecho internacional, asumen la tipología de delitos contra el derecho internacional. En este caso específico, como delitos de lesa humanidad. En efecto, en la medida que el ilícito cometido se da en el contexto histórico de atentados masivos, reiterados y sistemáticos en contra de la población, motivados por móviles políticos e ideológicos y ejecutados por agentes estatales, otorgan la configuración de un delito como tal, con las naturales consecuencias jurídicas que derivan de dicha calificación.

Finalmente, agrega que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío en las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común.

La indemnización comprende -según el artículo 2329- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral. La procedencia de la reparación del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional, ya a estas alturas resulta indiscutible.

En efecto, toda persona que alega que el perjuicio causado a un tercero le lesiona directamente a ella, puede iniciar una acción de reparación por el daño que le provocó esta situación. Es más, se ha dicho con insistencia por nuestros tribunales, que los daños morales provocados a los parientes más próximos no necesitan de prueba, presumiéndose el perjuicio por la muerte de su pariente.

Cita al efecto el caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C N°15, párr. 76) de la Corte Interamericana.

Fluye de todo lo ya señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por sus mandantes.



Solicita en definitiva: Se condene al Fisco de Chile a pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas y prisión política de las víctimas, la suma de \$200.000.000.- para cada uno de sus representados, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, con costas.

En presentación de 12 de diciembre de 2019, la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

Opone en primer término la excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los derechos humanos se posicionan dentro de la llamada “justicia transicional”.

Agrega que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de la justicia por tantos años buscada. Lo anterior pues los procesos penales se concentran en el castigo a los culpables, no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Desde la perspectiva del Estado, estas importan una compleja decisión de mover recursos económicos públicos desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos y este concurso de intereses se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación, los que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

En el caso chileno, el gobierno de Patricio Aylwin se abocó preferentemente a una serie de objetivos de justicia transicional, entre los cuales estaba la provisión de reparaciones para los afectados. La Comisión Rettig en dicho sentido propuso una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Su informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso y que derivó en la Ley N°19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en cuyo mensaje se consignó en términos generales que se buscaba “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

En lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el Ejecutivo siguiendo el Informe de la comisión, entendió por tal "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM

reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley N°19.123 y las demás normas conexas (como la Ley N°19.992 referida a víctimas de tortura) han establecido distintos mecanismos mediante los cuales concretar esta compensación, exhibiendo cómo nuestro país ha afrontado el complejo escenario de justicia transicional.

Al efecto, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha hecho principalmente a través de tres tipos de compensación: transferencias directas de dinero; asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, simbólicas. Todas ellas buscan la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En cuanto a las transferencias directas de dinero, estas se han establecido a través de diferentes leyes, las que han significado al Estado altos costos generales, los que detalla en cuanto a pensiones por Comisión Rettig y Comisión Valech, bonos, desahucio y bonos extraordinarios, las que a diciembre de 2015, significaron el desembolso por parte del Fisco de \$706.387.596.727.-

Desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual también es una forma de reparar un perjuicio actual. La sucesión de pagos por la vida del beneficiario no obsta a que pueda ser valorizada para conocer su alto valor compensatorio. Estas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige, obteniéndose compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sobre las reparaciones específicas, da cuenta que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, individualizados en el “Listado de Prisiones Políticos y Torturados”, de la nómina de personas reconocidas como tales.

Adicionalmente, los demandantes recibieron el aporte único de reparación Ley N°20.874, por \$1.000.000.-

Además, se refiere a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, como por ejemplo, se concedió a los beneficiarios



de la Ley N°19.234 como de la Ley N°19.992 el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país, el que cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva para sus beneficiarios, con un incremento presupuestario constante.

Se incluyeron además beneficios educacionales consistentes en la gratuidad de estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar para el ejercicio de este derecho la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, se concedieron subsidios para el acceso a la vivienda.

Asimismo, parte importante de la reparación por daño moral causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo, acciones que pretenden reparar a través de la satisfacción a las víctimas que en parte logre reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente es dar a la víctima una ayuda o auxilio que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

En este sentido, se han ejecutado diversas obras de reparación simbólica: la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en 1993, el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el que se conmemora el 30 de agosto; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros que detalla.

De lo expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica nacional que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, morales y patrimoniales.

Por eso, las indemnizaciones solicitadas en autos y el cúmulo de reparaciones que aludió, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. No procede por tanto, compensar dichos daños nuevamente. Así se pronunció la Corte Suprema en el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, Rol 4.753-2001, lo que reiteró en fallo de 30 de enero de 2013.

Agrega que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos chilena, al punto de denegar otro tipo de



reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos pagados por el Estado por pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Así por ejemplo en el Caso Almonacid con Chile.

Por su parte, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas, que no genere desigualdades. En igual sentido, Lira da cuenta de lo problemático de dar lugar nuevamente a demandas de indemnizaciones de perjuicios, lo que genera un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación. El rechazo a estas pretensiones fortalece los programas de justicia transicional.

En segundo término, opone la excepción de prescripción extintiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el artículo 2497 del mismo texto.

Conforme a los relatos de los actores, la detención ilegal y tortura sufrieron ocurrió a contar del 11 de septiembre de 1973 en adelante.

Entendiendo suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente transcurrió el plazo de prescripción de 4 años contemplados en la norma citada.

En subsidio, opone la excepción respecto del plazo de 5 años contemplado para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo contemplado en la primera de dichas normas.

Agrega que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que no existe en este caso.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin texto constitucional o legal expreso, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil y en especial las de su Párrafo I que la consagran se han estimado siempre de aplicación general y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del Código Civil, que manda a aplicar estas normas de prescripción a favor y en contra del Estado.



Luego, cabe destacar que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Finalmente, añade que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil en cuanto a la prescripción. Lo habría si aquellos textos la prohibieran o si el derecho interno no admitiera la reparación judicial oportunamente formulado. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Posteriormente, refiere sentencia de unificación de jurisprudencia de demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, de 21 de enero de 2013, autos Rol 10.665-2011, en la cual se dispuso que:

- El principio general que debe regir en la materia es el de prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad como toda excepción, debe ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

- Los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, sino solo relativa a la responsabilidad penal.

- No existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que se representa en este caso por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, artículo 2332 que fija un plazo de 4 años desde la perpetración del acto.

- No obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño.



Sobre el contenido patrimonial de la acción indemnizatoria que se ejerce, agrega que se debe aplicar las normas del Código Civil sobre prescripción, dado que lo pretendido es el ejercicio de una acción que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado.

Aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que dicha acción sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, ninguno de los que la contraria cita contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíban la aplicación del derecho interno en esta materia, lo que ha sido reiterado por la Corte Suprema en los autos Rol 1.133-06, caratulados “Neiva Rivas, Gloria con Fisco de Chile”.

En consecuencia, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, no puede tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad en materia penal, por lo que debe rechazarse la demanda de autos, al encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de lo anterior, formula las siguientes alegaciones sobre la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido:

Sobre el daño moral, cabe considerar que este consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obran en autos en la etapa probatoria.

Los daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, su indemnización no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.



Es en esta perspectiva que hay que regular el monto de la indemnización, que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

No resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o demandado para fijar la cuantía de la indemnización.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del obligado al pago. Las cifras pretendidas en autos resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los tribunales en esta materia.

En subsidio, alega que en todo caso la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor, conforme a las leyes de reparación que señaló, que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, todos los que buscan reparar el daño moral.

De no accederse en estos términos, se produciría un doble pago por un mismo hecho.

Finalmente, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en caso que la sentencia que se dicte acoja la demanda y establezca esa obligación, además de que se encuentre firme y ejecutoriada. Con anterioridad a ello, ninguna obligación de indemnizar tiene su parte, por lo que no hay suma que deba reajustarse.

Sobre los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

El 22 de diciembre de 2019, la demandante evacuó la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y derecho expuestos, agregando que el hecho de haber obtenido los demandantes pensiones de reparación con arreglo a la Ley N°19.123 no es óbice para que se les indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial.

La pretensión del Fisco de oponer excepción de pago es inconciliable con la normativa internacional, porque el derecho común interno solo es aplicable cuando no contradice a esta última y toda la preceptiva invocada por él no contempla incompatibilidad alguna entre estas indemnizaciones, por tratarse de formas distintas de reparación.



En cuanto a la excepción de prescripción, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no es coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción civil, lo que contraría la voluntad manifestada en la normativa internacional de derechos humanos. Cualquier pretendida diferenciación entre ambas resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se reclama, como ya explicó.

Todo lo señalado, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5 inciso 2º y 6 de la Constitución Política de la República. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene lo antes afirmado.

Agrega estima ajustado a la justicia los montos demandados, pues se trata del daño moral de la mayor entidad. En todo caso, resulta inútil esta discusión pues será el tribunal quien determinará soberanamente el monto del daño moral y desde cuando se aplican los reajustes e intereses, por lo que solo constata un hecho: los montos de las indemnizaciones se han ido incrementando, hasta alcanzar unas reales y serias, sobre todo en aquellas demandas en que es el Estado quien debe responder.

Finalmente, da cuenta que los reajustes e intereses pedidos están conforme a derecho, pues el tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, por lo que se tiene que descontar la desvalorización. En todo caso, se trata también de una discusión que carece de sentido, como ya explicó.

En presentación de 3 de enero de 2020, la demandada evacuó la dúplica, reiterando lo ya expuesto en su contestación.



Agrega en lo relativo a la excepción de reparación satisfactiva que el daño moral ya ha sido indemnizado, insistiendo sobre el esfuerzo que ha hecho el Estado para compensar el daño producido a las víctimas y en especial a las reparaciones recibidas por el demandante.

Sobre la prescripción, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Corte Suprema de 21 de enero de 2013 en los autos Rol 10.665-2011.

La misma Corte Suprema ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil, como hizo en la causa Domic con Fisco, Rol 4.753-2001.

Por resolución de 17 de enero de 2020 se recibió la causa a prueba.

Por resolución de 26 de mayo de 2022 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la detención ilegal y arbitraria y la tortura de personas ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad, esto es, están dirigidos a afectar la vida misma de las personas en su aspecto más básico y trascendente, del cual los países, entre los que se encuentra Chile, se han comprometido a evitar y, una vez producidos, sancionar. Siendo este caso de particular gravedad por cuanto no se encuentra discutido por la demandada que la demandante ha sido víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, cometidos por agentes del Estado.

SEGUNDO: Que a fin de acreditar su pretensión, el demandante acompañó:

- 20 informes psicológicos, todos emitidos por don Jorge Elgueta Olivares, correspondientes a los demandantes de autos.
- documento “Capítulo VIII: Consecuencias de la prisión política y tortura”, del Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura.
- Ord. N°092, remitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a este tribunal, informando que de los 20 nombres consultados, 12 aparecen en los listados de personas que concurrieron a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -Valech I- y 8 a la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura -Valech II-, en las cuales fueron calificadas como víctimas, indicando el número en que cada uno de ellos figura en el listado.

TERCERO: Que además la parte demandante rindió prueba testimonial, consistente en las declaraciones de don Santiago Ossiel Núñez Quevedo, don



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM

Denis Boris Navia Pérez y don Héctor Hipólito Álvarez López, quienes en lo sustancial dieron cuenta de la efectividad de los hechos narrados por los demandantes y del daño sufridos por ellos, lo que les consta por haber sido el primero estudiante de la Universidad Técnica del Estado; el segundo, profesor de la misma casa de estudios; y, el tercero, también estudiante de dicha universidad y haber compartido con ellos en la Organización de Ex Estudiantes de la Universidad Técnica y la Corporación Solidaria.

Además, dio su testimonio don Jorge Fernando Elgueta Olivares, quien ratificó los informes psicológicos que fueron allegados por la parte demandante, dando cuenta del daño sufrido por los actores.

CUARTO: Que por su parte, el demandado allegó ORD.: N°62698/2019, de 20 de diciembre de 2019, emitido por doña Valeria Vargas Meza, Jefa (S) de Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, detallando los beneficios de reparación Leyes N°19.234, N°19.992 y N°20.874 recibidos por los demandantes de autos.

QUINTO: Que de la prueba acompañada, como de los relatos efectuados por los propios demandantes, fluye que todos ellos fueron detenidos en la Universidad Técnica del Estado, ex UTE, siendo estudiantes o académicos de dicha casa de estudios, para luego ser trasladados en su mayoría a los centros de detención Estadio Chile y/o Estadio Nacional, en donde permanecieron por un tiempo determinado y fueron víctimas de diversos apremios, como también de tortura física y psicológica por parte de agentes estatales. Además, de la misma prueba puede concluirse que algunos estuvieron reclusos en otros centros de detención, sufrieron otros episodios de represión o tortura durante la duración de la dictadura cívico-militar e incluso debieron salir al exilio, todo lo que les causó gran daño, generando secuelas en su desarrollo personal, emocional, familiar, social y profesional, lo que ha sido reconocido por el propio Estado como violaciones a los Derechos Humanos, circunstancias por las cuales se les ha dado el carácter de víctimas en documentos oficiales.

SEXTO: Que en cuanto a ser los actores beneficiarios de la Ley N°19.992 que les otorgan una pensión, en efecto esta y otras reparaciones “simbólicas”, son reparaciones satisfactorias que emanan de los Principios y Directrices fijados por las Naciones Unidas en el año 2005, como estándares mínimos de reparación en su aceptación genérica, que están dirigidos a dar cuenta de constricción pública y apoyo inmediato a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, pero que no quedan agotados allí, al punto, que incluso la Corte Interamericana ha sostenido que las reparaciones pecuniarias pueden ser reclamadas al Estado, no obstante



haber sido dirigidas acciones contra los responsables directos, por lo que parece atendible que no pueda impedirse, en primer lugar, el ejercicio de la acción de indemnización por daño moral a los tribunales ordinarios de justicia, más aún si las transgresiones que han dado origen a la pretensión reparatoria, se realizaron como acción de plan de gobierno contra civiles.

SÉPTIMO: Que por lo demás, en los casos específicos de que se trata, tampoco ha sido demostrado por la demandada que haya sido compensado el daño presuntamente generado, ni siquiera por acciones generales, ya que el solo hecho de haberse realizado por el Estado obras de carácter universal, no conlleva necesariamente la mitigación individual de los afectados.

OCTAVO: Que también se ha señalado por la demandada que la acción indemnizatoria se encuentra prescrita, por cuanto la detención arbitraria y tortura tuvieron lugar en su gran mayoría en 1973, y que aun cuando se estimara que el plazo debe contarse desde el retorno del gobierno democrático o desde el Informe de Verdad y Reconciliación, los 4 años que prescribe el artículo 2332 del Código Civil o incluso los 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo legal, habrían transcurrido largamente hasta la fecha de la notificación de la presente demanda civil, al Fisco de Chile, ocurrido el 25 de noviembre de 2019.

NOVENO: Que lo anterior sería de este modo si se atendiera a las normas de derecho privado, ya que en efecto desde la mirada positivista de resguardo del derecho de propiedad y la libre circulación de los bienes, es decir, desde la protección patrimonial, tanto al Fisco como a los privados, deben ser tratados en igualdad de condiciones y aplicársele la institución de la prescripción para adquirir bienes y extinguir deudas. Así lo señaló el propio Bello en el Mensaje del Código Civil, cuando expresa “Innovaciones no menos favorables a la seguridad de las posesiones y al crédito encontraréis en el título De la Prescripción”.

DÉCIMO: Que, sin embargo lo indicado, Chile forma parte de una comunidad internacional que ha establecido no solamente establecer en los instrumentos internacionales que los rigen, un beneficio mutuo como Estados contratantes, sino con un objeto y fin determinado, cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independiente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción



(...)¹”. Lo anterior implica establecer en la base del análisis y aplicación del concepto de responsabilidad a la víctima y al principio Pro Persona, esto es, debiendo “preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la persona, independientemente si dicha norma se encuentra en un tratado internacional o en una disposición de derecho interno²”.

UNDÉCIMO: Que en efecto las Naciones Unidas aprobaron, en el año 2005, los Principios y Directrices relativos a los derechos de las víctimas en casos de violaciones a los Derechos Humanos y derecho internacional humanitario, señalando que debe darse a las víctimas una reparación plena y efectiva, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.

DUODÉCIMO: Que entonces el imperativo de protección y reparación en casos de violación a los derechos humanos emana del derecho internacional y es un principio del Derecho Internacional Público “aplicable directamente en el sistema normativo nacional frente al incumplimiento de obligaciones internacionales y posee una base normativa de rango superior a la ley civil”³.

DÉCIMO TERCERO: Que la Constitución Política de la República en su artículo 5 inciso 2º señala que “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

DÉCIMO CUARTO: Que los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental disponen el principio de legalidad de los actos estatales, estableciendo expresamente la nulidad de aquellos que se aparten del mandato constitucional -y por aplicación del artículo 5 de los Tratados Internacionales- generando responsabilidad y sanciones.

DÉCIMO QUINTO: Que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, establece en su

¹ Corte IDH. OC-2/82, citado en Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash, pág. 12.

² Op. Cit, pág. 13, cita propia de ponencia en el Centro de Estudios Constitucionales Universidad de Talca, septiembre de 2012.

³ “Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash Rojas, Pág. 134.



artículo 1 que estos “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

DÉCIMO SEXTO: Que a su vez el Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que “las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una quiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.”

A su vez, el artículo 130 expresa que “Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio.”

Y el artículo 131 establece “Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la Convención Americana de los Derechos del Hombre en su artículo 1 prescribe que “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

DÉCIMO OCTAVO: Que por último, la Convención de Viena sobre los Derecho de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados que “Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

DÉCIMO NOVENO: Que la obligación de reparación íntegra entonces emana de la aplicación preferente al derecho internacional de los Derechos Humanos para cumplir los compromisos que el Estado chileno ha contraído y aplicar dichos tratados de buena fe⁴. Normas internacionales que son de “aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5 de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían aludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno y que invoca el Consejo de Defensa del Estado en resguardo de los intereses fiscales (...)”⁵.

VIGÉSIMO: Que en este caso se trata entonces de crímenes de lesa humanidad en que las acciones de reparación integral no han prescrito, puesto que la condición de imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este caso, emana de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos a la luz de los principios generales del derecho internacional que tiene rango supra legal, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya citado; sin que pueda invocarse derecho interno de menor jerarquía para desatenderlas, por lo cual también las alegaciones principal y subsidiaria de prescripción de la acción de responsabilidad serán desestimadas.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que conforme se ha probado y reconocido, las acciones delictuales fueron cometidas por agentes del Estado; siendo su actuar una contravención directa a las normas del derecho internacional y los principios constitucionales de los artículos 6 y 7.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el artículo 38 de la Constitución Política de la República señala que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba

⁴ Op. Cit. Pág. 161

⁵ Caso Álvaro Corvalán Castilla con Fisco de Chile.



fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

VIGÉSIMO TERCERO: Que de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de la víctima, no habría tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, solo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los apremios físicos y psicológicos infligidos a la actora.

VIGÉSIMO CUARTO: Que la responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación al daño moral sufrido por el demandante.

VIGÉSIMO QUINTO: Que para acreditar el daño moral sufrido se tendrán en cuenta los informes allegados que se refiere a las afectaciones físicas y emocionales sufridas por los demandantes, producto de los hechos delictuales cometidos por agentes del Estado y que han permanecido luego de más de 40 años de ocurridos, los que además fueron ratificados en audiencia testimonial por el profesional que los efectuó.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en cuanto al monto de la indemnización, se analizará el caso de cada uno de los demandantes, sin perjuicio de constatar desde ya, como se dijo, que los hechos que causan el agravio han permanecido por largo tiempo y tenido influencia negativa en el desarrollo personal, emocional, familiar, laboral y social de todos y cada uno de ellos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en lo relativo a don Sergio Antonio Muñoz Cáceres, ha de tenerse en especial consideración, además de las evidentes y profundas consecuencias psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido, que se trataba de un estudiante, que fue expulsado por motivos políticos, por lo que vio truncada sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, como también que sufrió un segundo episodio de torturas, siendo detenido por aproximadamente 1 año, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$120.000.000.-

VIGÉSIMO OCTAVO: Que en relación a don Luis Cifuentes Seves, debe tenerse presente, además de las indiscutibles secuelas que dejaron en él los agravios y torturas a las cuales fue sometido, que estuvo recluso en tres centros



de detención y solo recuperó su libertad más de 6 meses después. Además, era un académico, que perdió su fuente laboral al ser exonerado e incluso debió salir al exilio, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$100.000.000.-

VIGÉSIMO NOVENO: Que sobre don Héctor Leonardo Peña Soto, ha de prestarse especial atención, además de las irrebatibles consecuencias psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido, que a la época en que ocurrieron los hechos era apenas un joven estudiante, que vio interrumpido el curso natural de su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios a la cual pertenecía, como también que fue víctima de otro episodio de detención y torturas, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$90.000.000.-

TRIGÉSIMO: Que en lo que toca a don Carlos Alberto Vega Pizarro, ha de tenerse en particular consideración, además de las evidentes y profundas consecuencias derivadas de los apremios físicos y psicológicos a los cuales fue sometido, que se trataba de un estudiante, que vio tronchado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios a la cual pertenecía, como también que fue víctima de otro episodio de detención y torturas durante 1976, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$90.000.000.-

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que en lo relativo a don Gregorio Guillermo Suarez Bustos, además de las evidentes y profundas consecuencias psicológicas que se siguen de los agravios de toda índole a los cuales fue sometido por razones políticas, debe tenerse presente que al ser detenido era solo un estudiante, que vio alterado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios, a la que si bien pudo retornar más adelante, no lo fue en iguales condiciones, como también que fue despedido del trabajo que le daba sustento, razón por la cual el monto a indemnizar se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que en relación a don Emilio Humberto Daroch, ha de considerarse especialmente además de las indiscutibles secuelas que dejaron en él los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido en la mencionada universidad, que a la época de los hechos de autos se trataba apenas de un estudiante, que vio truncado su desarrollo personal y profesional al ser impedido de proseguir sus estudios y que por lo de demás debió salir por un



período al exilio, razón por la cual el monto a indemnizar se fijará prudencialmente en la suma de \$80.000.000.-

TRIGÉSIMO TERCERO: Que sobre doña María Geraldina Lisham Guerrero, ha de tenerse en particular consideración, además de las innegables consecuencias psicológicas derivadas de las torturas a las cuales fue sometida al ser detenida, que se trataba de una estudiante, que debió abandonar sus estudios de forma intempestiva al ser expulsada de la universidad a la cual pertenecía, lo que alteró el curso normal de su vida y dificultó sus oportunidades personales y laborales al punto de obligarla a salir al exilio, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$80.000.000.-

TRIGÉSIMO CUARTO: Que en relación a don Carlos Oliverio Galaz Muñoz, ha de tenerse presente que, además de las evidentes y profundas consecuencias psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido tras su detención en la Universidad Técnica del Estado, se trataba apenas de un estudiante, que fue forzado a abandonar sus estudios de forma intempestiva al ser expulsado de la universidad a la cual pertenecía, lo que perturbó el desarrollo normal de su vida y dificultó sus oportunidades personales y laborales, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-

TRIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a don Eduardo Selin Nallar Abud, debe tenerse en especial atención que además de las incuestionables consecuencias que se siguen de los apremios físicos y psicológicos a los cuales fue sometido al ser detenido, que se trataba de un joven estudiante, que vio trastornado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la universidad a la cual pertenecía, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$65.000.000.-

TRIGÉSIMO SEXTO: Que en lo que toca a don Mario Raúl Navarro Cortés, debe atenderse a que además de las evidentes consecuencias psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido en la universidad, estuvo privado de libertad durante más de 6 meses, que era un académico que perdió su fuente laboral al ser exonerado de sus labores, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$90.000.000.-

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en lo relativo a doña Fedora Clotilde Demsky Verdugo, debe tenerse presente, además de las indiscutibles secuelas seguidas de los agravios a las que fue sometida al ser detenida, que se trataba de una estudiante, por lo cual estas afecciones tuvieron una alta connotación sexual,



como también que tras 1 año de los hechos relatados, fue expulsada, hecho que alteró el curso normal de su vida y dificultó sus oportunidades personal y laborales durante su juventud, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$70.000.000.-

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que en cuanto a doña Erica del Tránsito Osorio Araya, debe tenerse presente, además de las notorias consecuencias de toda índole que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometida al ser detenida, que se trataba de una estudiante, por lo cual estas afecciones tuvieron una alta connotación sexual, como también que tras 1 año de los hechos relatados, fue expulsada, hecho que alteró el curso normal de su vida y dificultó sus oportunidades personal y laborales, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-

TRIGÉSIMO NOVENO: Que sobre don Sergio Carlos Moscoso Bustamante, debe considerarse que además de las indiscutibles consecuencias psicológicas que se siguen de los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido, que se trataba de un estudiante con altas expectativas profesionales producto de su buen desempeño académico, que se le entorpeció alcanzar un grado universitario solo por razones políticas, con lo que vio obstaculizado el curso normal de su desarrollo personal y profesional al punto que debió salir al exilio en busca de mejores oportunidades, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$90.000.000.-

CUADRAGÉSIMO: Que en cuanto a don Aldo Alberto Leal Labrín, debe tenerse en especial consideración que, además de las evidentes y profundas consecuencias psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido solo por su inclinación política, que se trataba apenas de un estudiante, que vio trastornado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios a la cual pertenecía, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que en lo relativo a doña Marcela Liliana Lizana Fuentes, debe tenerse presente, además de los irrefutables efectos negativos que se derivan de los agravios que sufrió en la Universidad Técnica del Estado, producto de los interrogatorios a los cuales fue sometida por haber auxiliado a otra persona, que se trataba solo de una estudiante, que además fue expulsada, hecho que alteró el curso normal de su vida y dificultó sus oportunidades personal y laborales, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$70.000.000.-



CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que en lo que toca a don Rimsky Iván Ricardo Ramírez, debe tenerse en consideración que, además de las evidentes y profundas consecuencias psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido, que a la época de los hechos relatados era un estudiante que vio trastornado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios a la que pertenecía y despojado de todos los beneficios estudiantiles que permitían su subsistencia, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que en lo que toca a don Álvaro Orlando Palacios González, debe tenerse presente que, además de las innegables secuelas psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido, que se trataba de un estudiante, que vio trastornado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios en la cual pretendía formarse como profesional, razón por la cual el monto a indemnizar se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que sobre don Eduardo Jorge Tourrel Navarrete, debe considerar que, además de las evidentes y profundas consecuencias psicológicas que se derivan de los agravios y torturas a las cuales fue sometido al ser detenido, se trataba apenas de un estudiante a la época de los hechos de autos, que vio alterado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios a la cual pertenecía, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a doña Iris Natalia Aceitón Venegas, debe considerar que además de los lamentables efectos derivados de los agravios y torturas a las cuales fue sometida al ser detenida, que se trataba de una estudiante, por lo cual estas afecciones tuvieron una alta connotación sexual, como también que fue expulsada, hecho que alteró el curso normal de su vida y dificultó sus oportunidades personal y laborales, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$70.000.000.-

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que en relación a don Juan Bautista Martínez Amigorena, debe tenerse presente, además de las irrefutables secuelas de índole físico y psicológico que se siguen de episodios como los que vició, que se trataba apenas de un estudiante, que vio trastornado su desarrollo personal y profesional al ser expulsado de la casa de estudios en la cual pretendía formarse, razón por la cual el monto a indemnizar en su caso se fijará prudencialmente en la suma de \$75.000.000.-



CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que las referidas cantidades ordenadas pagar, se hará con el reajuste del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, puesto que, en efecto, la obligación de indemnizar es declarada con la dictación de esta sentencia y el reajuste tiene como único objeto morigerar los efectos de la inflación.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que por haber tenido motivo plausible para litigar, el Fisco no será condenado en costas.

En consecuencia y visto además la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes N°19.123 y N°19.980; y, artículos 144, 170 y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se acoge la demanda, condenándose al Estado de Chile a pagar como indemnización de perjuicios por daño moral a cada uno de los demandantes, las sumas señaladas en los considerandos vigésimo séptimo al cuadragésimo sexto, con los reajustes que se indican en el considerando cuadragésimo séptimo.

II.- Que no se condena en costas al Fisco.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBKGXBNRYSM